

definitivamente en la causa sobre este punto, pues de que se haya iniciado esta no se sigue necesariamente que deba ser condenado el reo, pudiendo muy bien ser absuelto; y en tal duda es imposible decidir si fué ó no juzgado ó condenado por leyes exactamente aplicables al hecho inculcado, y en consecuencia, si hubo ó no violación del artículo 14 constitucional; Considerando: que el Lic. Delgado, no está reducido á prisión sino simplemente arrestado en la Ciudad, con lo que en nada se contraviene el artículo 18 de la Constitución, que dispone: que no habrá lugar á prisión sino por delitos que merezcan pena corporal; Considerando: que la disposición consignada en el artículo 17 de la misma, de que los tribunales estaban siempre espeditos para administrar justicia, tuvo por objeto hacer desaparecer la cesación de las tareas judiciales en determinadas épocas con el nombre de vacaciones, y no corregir la mayor ó menor morosidad en el despacho de los negocios; por lo que la negligencia por parte del segundo suplente en la prosecución de la causa del Lic. Delgado, no puede dar lugar al amparo federal en fuerza del artículo citado.

Con fundamento del artículo 101 de la Carta constitucional, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 19 de Julio del presente año por el Juez de Distrito, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Lic. Pedro Delgado, contra las providencias del segundo suplente del mismo Distrito, por las que mandó formarle causa y le señaló la ciudad de Guanajuato como lugar de arresto.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—

Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—P. Ordaz.—M. de Castañeda y Ndjera.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 21 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*—oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Orosio Jimenez, contra la determinacion del Gobierno del mismo Estado, que dispuso se volviera á reunir nuevamente el jurado militar de sentencia que se había declarado incompetente para conocer en la causa que se seguía al quejoso por el delito de homicidio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que con la atención que la importancia y gravedad del negocio parecen exigir, ha meditado detenidamente los diversos puntos á que se contrae la solicitud de amparo de Orosio Jimenez. Acusado este de homicidio en la persona de Juan Ramos, soldado como él de la compañía de policía, se le comenzó á juzgar por la jurisdicción ordinaria, representada por el C. Juez de primera instancia de Tlaxiaco; pero después de la confesion con cargos, aquel Juzgado consignó la causa á los tribunales militares, por suponer que se trataba de un delito mixto cometido por un individuo sujeto al fuero de guerra.

El jurado de sentencia reunido conforme á la ley de 20 de Enero de 1869 y su reglamento de 19 de Febrero del mismo año, se declaró incompetente, no obstante que el jurado de hecho había procedido á declarar

la culpabilidad del acusado Orosio Jimenez. Parecía todo terminado con respecto, al menos, á la jurisdiccion militar que se había desprendido del negocio al pronunciar el fallo de incompetencia; mas no fué así: el jurado, de Orden del Superior Gobierno del Estado, volvió á reunirse y condenó á muerte al presunto reo.

La incompetencia para el caso, de los tribunales militares se apoya, en la declaracion misma del jurado de sentencia. Pronunciado el fallo sobre escepcion de tal importancia como la de declinatoria de jurisdiccion, no puede ni debe calificársele de auto ó providencia meramente interlocutoria, sino que es resolución definitiva con gravámen irreparable, como todo auto, toda providencia relativa á jurisdiccion. Es bien sabido que si los autos puramente interlocutorios pueden ser revocados durante el transcurso del juicio, no así los relativos á defensas y escepciones de importancia como es la relativa á fallo de jurisdiccion. Contra estos fallos se admite el recurso de apelacion, cuando la parte lo interpone y la naturaleza del negocio lo consiente; y si no interpone el recurso ó no es admisible, el fallo queda ejecutoriado. Resulta de lo expuesto; que al revocar el Superior Gobierno del Estado el primer fallo del jurado de sentencia, se constituyó en tribunal de revision de la sentencia de un jurado militar, cuyos fallos no son revisables, con arreglo á la ley y reglamento ya citados que crearon los jurados en materias de fuero de guerra.

Aparece pues, violada la garantía que otorga el artículo 13 de la Constitución de la República, pues que el Ejecutivo del Estado al usar de la facultad que por ninguna ley tiene concedida, de revocar un fallo de un jurado militar, se constituyó en tribunal especialísimo, desconocido aun por el mismo especial fuero de guerra, cuyas leyes no conceden en el dia, como sucedia antes cuando juzgaban los consejos de guerra, ninguna facultad jurisdiccional á los Comandantes militares y Generales en jefe.

Tambien consta violada la garantía del artículo 24 de la Constitución de la República, pues si bien la sentencia primera del jurado de sentencia, no era para el reo la definitiva de su causa, sí tenia el carácter de tal para la jurisdiccion militar, que debe cesar desde ese punto de todo procedimiento, supuesta su propia declaratoria de la competencia. El artículo citado de la Constitución tiene aplicacion al caso, pues que Orosio Jimenez fué juzgado dos veces por un mismo tribunal, pronunciándose dos sentencias definitivas contrarias la una á la otra. Esto fué cabalmente lo que quiso evitar la Constitución: el desprestigio de la autoridad judicial y el peligro que amagaría á todos de volver á ser juzgados, no obstante un fallo que pusiera fin al procedimiento.

Mas fuerza cobran las razones anteriores, si se atiende á que los jurados de sentencia no son un tribunal permanente, sino escogidos conforme á su reglamento para cada caso. Una vez pronunciado el fallo, justo ó injusto, fundado ó infundado, el jurado se disuelve, deja de constituir un tribunal, y su sentencia debe precisa é indispensablemente ejecutarse, salvo la responsabilidad de los miembros del jurado, que se les ha de exigir en el modo y términos prevenidos por la ley, (véanse los artículos 59, 60, 62 y 63 del reglamento citado de 19 de Febrero de 1869.) Fué pues un fallo, un fallo definitivo el que declaró la incompetencia de la jurisdiccion militar; y sujetar el negocio á segundo fallo, ha equivocado á hacer juzgar á un acusado dos veces por un mismo tribunal. Una vez disuelto el jurado de sentencia, despues de su primer veredicto, ya no constituía un tribunal reconocido por la ley.

Al volverse á reunir carecía de jurisdiccion, de investidura legal, no eran jueces conforme á las leyes militares, sino una comision extraordinaria que procede en virtud de una Orden de la plaza, emanada del Superior Gobierno del Estado. Al romper su primer veredicto y arrojarlo á condenar á muerte al acusado, violó el que antes ha-

bía sido jurado, el artículo 13 de la Constitución de la República y también la garantía otorgada por el 24 de la misma.

No teniendo misión legal, que había concluido después de haberse disuelto, pronunciado que fué su primer veredicto, formaba no un tribunal reconocido por la ley, sino una comisión de Capitanes, especialmente designada para sentenciar á Orosio Jimenez. Y por lo que hace á la garantía del artículo 24 citado, ya se ha visto que volvió el jurado á juzgar de una causa en que ya había pronunciado su primer fallo, único válido, declarando la incompetencia. Antes de concluir, permitirá el Juzgado á este Ministerio, indicar que el artículo tercero de la ley de 20 de Enero de 1869, reglamentaria de los juicios de amparo, no parece tener aplicación al caso.

Prohíbe, en verdad, el recurso de amparo en negocios judiciales; pero ni el acuerdo del Superior Gobierno del Estado que mandó ver de nuevo por el jurado de sentencia la causa de Orosio Jimenez, provino de una autoridad judicial, ni el segundo veredicto que condenó á muerte al mismo Jimenez fué la obra de un tribunal reconocido por la ley ó ejerciendo sus facultades con arreglo á ella. Ya se ha visto que una vez pronunciado el primer fallo y disuelto el jurado, cesó su existencia legal como tribunal militar.

Ademas, hay contradicción notoria entre el artículo octavo citado, y artículo 101 en su fracción primera de la Constitución de la República. El recurso de amparo lo otorga esta, por leyes ó actos de cualquiera autoridad, en general y sin excepción ninguna, que violan las garantías individuales; y es claro que en caso de oposición entre el Pacto fundamental y una ley secundaria, debe estarse á lo que dispone la Constitución, por ser la primera ley del país que no puede ser derogada por una ley secundaria; ni reformada sino de la manera que la misma establece, (véanse sus artículos 126 y 127.)

Este Ministerio concluye pidiendo al Juz-

gado, se sirva amparar y proteger á Orosio Jimenez en las garantías que le otorgan los artículos 13 y 24 de la Constitución federal, y que le fueron violadas, según antes se ha explicado.

Oaxaca de Juarez, Julio 26 de 1873.—
José María Ballesteros.

Es copia de su original, que obra en el juicio respectivo á que me remito. Oaxaca de Juarez, Julio 26 de 1873.—*José María Ballesteros.*

Sentencia del O. Juez de Distrito

Oaxaca de Juarez, Julio 31 de 1873.—
Visto este juicio de amparo promovido por Orosio Jimenez, soldado la compañía denominada de Policía del Estado, que con el carácter de guardia nacional, mandó organizar el gobierno del mismo por acuerdo especial de 28 de Febrero de 1872, contra las providencias de dicha autoridad que respectivamente le consignaron al fuero de guerra; para que se le juzgase según las leyes novísimas y revocase á su vez la declaración de incompetencia, por el homicidio con circunstancias agravantes cometido en el pueblo Putla, distrito de Tlaxiaco, en su cuartel, con arma de fuego, en la persona de Juan Ramos, perteneciente á la misma compañía, hallándose ambos en servicio de compañía del propio Estado, y habiendo declinado jurisdicción sin efecto ante el jurado de hecho que lo declaró culpable del expresado homicidio; y pasada la causa al jurado de derecho, volvió á declinarla, declarándose esa vez incompetente por unanimidad de votos, resolviendo en consecuencia, que debía ser juzgado el quejoso por los tribunales del fuero común respectivo; y remitida la causa al referido gobierno para la ejecución del fallo, conforme al reglamento de 19 de Febrero de 1869 en su artículo 60, lejos de ejecutarlo, resolvió que fuese juzgado nuevamente, en virtud del error de hecho que se creyó cometido,

como se verificó: dando todos por efecto que fuese condenado por el mismo jurado de derecho á la pena ordinaria, cuyos resultados se mandaron suspender oportunamente en virtud de este juicio y del recurso de indulto que tambien interpuso, violándose en su persona con tales procedimientos del gobierno y jurados referidos, las garantías que otorga la Constitucion federal en sus artículos 13 y 24; visto el informe de la autoridad responsable que se apoya para haberlo así verificado por su parte, en la fraccion tercera del artículo segundo de la ley general de 15 de Diciembre de 1869; artículos 19, 37 y 47 relativos al establecimiento de una guardia llamada nacional, sin perjuicio de la facultad que concede la propia Constitucion general de 1857 al Congreso de la Union en su fraccion 19, y entretanto se expedia la ley orgánica definitiva correspondiente; visto por último lo pedido en contra de dichas providencias por el Ministerio fiscal, cuya exposicion razonada se da aquí igualmente por expresa, y los alegatos exhibidos por las partes, y teniendo en consideracion. Primero: que el Código fundamental de la República al derogar los fueros privilegiados dispone que por una ley secundaria se habrian de fijar los casos de escepcion del fuero común, para el goce del militar, y que la que se dió provisionalmente en virtud de facultades extraordinarias en 15 de Setiembre de 1857, fué con referencia únicamente á los soldados del ejército, milicia activa y demás fuerzas que estuviesen á disposicion del Supremo Gobierno general, segun el tenor expreso de su artículo 29 fraccion 19. Segundo: que el agraviado Orosio Jimenez pertenece á la compañía expresada de policía que no estaba á disposicion de dicho Supremo Gobierno federal. Tercero: que esa clase de milicias creadas por los Estados por causas particulares y extraordinarias, no constituyen la verdadera guardia nacional que debe organizarse constitucionalmente por el Congreso

federal, segun el artículo 72 fraccion 4 del citado Código de 57, y lo exige el sistema democrático, aun no desarrollado en toda su plenitud entre nosotros, como se propuso el pueblo soberano al decretarlo por medio de sus legítimos representantes, en virtud de los intereses de partido que desgraciadamente han fraccionado y preocupado las mas veces á la Nacion, distrayéndola su atencion, con perjuicio de los negocios públicos mas importantes, para complementar esa obra grandiosa de nuestras sabias y humanitarias instituciones, tan combatidas por sus enemigos interiores y exteriores, aunque afortunadamente sin efecto; pues ese mismo pueblo procura á costa de todos sacrificios, se logre el fin para que sean efectivas las inestimables garantías y derechos que concede al hombre y al ciudadano. Cuarto: que la ley general de 20 de Enero de 1869 y su reglamento de 19 de Febrero del mismo año, solo se refieren tambien á los delitos del orden militar propiamente tal. Quinto: que los poderes públicos no tienen mas facultades que las que les conceden expresamente las leyes, y que de estas nace la autoridad de los que mandan y las obligaciones de los que obedecen. Sexto: que todo privilegio es odioso, y aun en caso de positiva duda debe interpretarse en favor de la jurisdiccion ordinaria correspondiente. Setimo: que aun suponiendo sin conceder, que no se hubiese declarado incompetente el jurado de derecho y hubiese podido asimismo reunirse de nuevo de una manera pública y legal, una vez hecha esa declaracion primera de incompetencia, ni era autoridad judicial en rigor de derecho, ni debia ejecutarse su segundo fallo privado por dichos motivos. Octavo: que el artículo 89 de la ley de 20 de Enero de 1869 debe conciliarse con el artículo 101 de la Constitucion federal que habla de los negocios judiciales, entendiéndose por tales los ejercidos con arreglo á derecho: y aun en caso de oposicion absoluta debe estarse á esta y no á aquella, por ser la ley supre-

ma de la nacion que todos deben obedecer, conforme al texto de sus artículos 1º, 41, 50, 109, y 117; y la que forma el derecho público de los mexicanos. Noveno: que una vez ocurrida tal complicacion de procedimientos y equivocaciones, aunque de buena fé y nacidas igualmente de la diversa manera de interpretar las leyes generales, y libertad que se han aventurado á tomarse algunos Estados, por su celo para suplir la falta temporal de las leyes orgánicas que aun no se han podido expedir, por causa de los trastornos públicos ocurridos, y que hasta que no se expidan en el ramo de que se trata no pueden fijar definitivamente ese fuero, que solo se garantiza para los asuntos que tengan exacta conexión con el servicio militar. Decimo: que los jueces no tienen mas facultad que aplicar las leyes vigentes en forma, á los casos que ocurran, y no la de sancionar hechos que les son notoriamente contrarios, sin incurrir de otra manera en gravísimas responsabilidades por infracción de las leyes fundamentales, y cuanto mas ver y tener presente convino: La Justicia federal apoyada en todas las razones de hecho y de derecho expuestas, y artículos 101, 102 y 128 del Código general de la República de 1857 y ley de 20 de Enero de 69, declara: que ampara y protege á Orosio Jimenez, contra las providencias que motivan esta controversia: mandando se haga saber este fallo, se publique como corresponde y se eleven las actuaciones originales á la Suprema Corte de Justicia en grado de revision. El C. Juez primero suplente de Distrito del Estado, así lo sentenció y firmó. Doy fé.—*Juan Ignacio Fagoaga*.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, Agosto 5 de 1873.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 26 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Orosio Jimenez, soldado de la compañía denominada de Policía de ese Estado, contra la determinación del Gobierno del mismo, que dispuso se volviera á reunir nuevamente el jurado militar de sentencia, que se había declarado incompetente para conocer en la causa que se seguía al quejoso, por el delito de homicidio perpetrado en la persona de Juan Ramos soldado de la misma compañía, en el pueblo de Putla; de cuyo delito había conocido primero el Alcalde de este pueblo, y despues el Juez ordinario de Tlaxiaco, el cual, tomada al reo su confesion con cargos, dispuso se pasara la causa á la autoridad militar por creerla de su jurisdiccion, en lo que no estando conforme el acusado, opusola escepcion de incompetencia ante el jurado militar de hecho, que no creyó deber admitirla, y lo declaró culpable del homicidio, por cuyo motivo volvió á poner la misma escepcion ante el jurado de sentencia, que opinando de conformidad, se declaró incompetente y mandó se remitiera la causa al Juez á quien correspondiera; resolución á la cual se opuso el Gobierno del Estado, dando por razon que el decreto que había mandado organizar la compañía de policia, de que era soldado Orosio Jimenez, la declaraba al mismo tiempo como cuerpo de Guardia nacional, y sujeta á las leyes y penas militares, ordenando se reuniera de nuevo el jurado de sentencia para imponer la pena á que era acreedor el reo; lo cual este cree ser atentatorio á las garantías que otorgan los artículos 13 y 24 de la Constitucion federal. Visto el pedimento del promovente solicitando ampliacion del amparo al hecho de haberse reunido de nuevo el jurado de sentencia, declarándose esta vez competente para conocer en su causa, y condenándolo á la pena de

muerte, con violacion segun alega, de los artículos constitucionales ya citados y de la ley de 12 de Febrero de 1869, y considerando: que no se dió ni se tuvo por motivo para mandar reunir de nuevo el jurado de sentencia, que hubiera contradiccion en las declaraciones de este, ó que no hubiera contestado categóricamente á las preguntas que se le habian hecho, únicos casos en que por el reglamento de 12 de Febrero de 1869 se puede convocar de nuevo al jurado, artículo 48; que las leyes 19 título 22 y 4 título 26, pagina 3ª, que el referido jurado citó en su último fallo para fundar la legalidad de la revocacion de su primer veredicto, en virtud de haber sido motivado este por un error, de ninguna manera pueden justificar semejante resolución, pues que ellas se refieren en los diversos ejemplos que contienen, únicamente á errores de cuenta, y por el contrario, la primera de esas leyes declara espresamente que aunque se mostrasen con posterioridad documentos que á haberlos visto el Juez hubiera fallado de otra manera, no por eso podria ser revocada la sentencia, que es el caso presente, pues el jurado anuló su primera declaración en vista del decreto que mandó organizar la compañía de policía, el cual disponia al mismo tiempo que fuera considerada como de guardia nacional y sujeta en todo á las leyes militares: que por tales motivos, la declaracion de incompetencia del repetido jurado quedó firme y valedera debiendo llevarse á ejecucion, y por consiguiente; que teniendo el acusado á su favor tal declaracion que le concedia pleno derecho para ser juzgado por los tribunales ordinarios, el sujetarlo de nuevo á un tribunal militar, era violar en su persona la garantía que otorga el artículo 17 de la Constitucion federal; y con fundamento del artículo 101 de la misma, se decreta.

Primero: es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Oaxaca, en 31 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de

la Union ampara y protege á Orosio Jimenez, contra la orden del Gobierno de ese Estado, mandando convocar de nuevo al jurado de sentencia, que se habia declarado incompetente en la causa que se le seguia por homicidio; y contra el hecho de haberse reunido de nuevo el espresado jurado y haber revocado su primera declaracion.

Segundo: póngase al quejoso á disposicion del Juez ordinario y competente para conocer en su causa.

Tercero: Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Iramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico, México, Octubre 11 de 1873.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Antonia Gutierrez, á nombre de su hijo Antonio Balderrama, contra el veredicto del jurado militar, que lo condenó á sufrir la pena de muerte.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por Antonia Gutierrez, por Antonio Balderrama, contra la autoridad militar que sentenció á este á sufrir la última